

LA SEMANA POLÍTICA

Sin rigor en el gasto

Si hay algo que ha ido quedando de manifiesto en los últimos años es la displicencia con que autoridades del gobierno central, regional o municipal han manejado los recursos públicos. Las situaciones más graves tienen alcances penales o administrativos, y otras que si bien podrán ajustarse formalmente a la ley, dan cuenta de un nivel de improvisación, falta de rigor técnico, indolencia y aprovechamiento político de los cargos para gastar dineros del Estado en beneficio de sus intereses partidarios o personales que, a pesar de lo frecuente, no dejan de sorprender una y otra vez. Naturalmente, estos abusos y mal uso de los recursos no son privativos de un sector político, tal como lo evidencian las investigaciones judiciales que se realizan de las gestiones alcaldías de autoridades de distinto signo.

Lo sucedido con la compra fallida por parte del Estado de la que fuera la casa de Salvador Allende es un buen ejemplo de ello. Si bien el Tribunal Constitucional y la justicia penal determinarán si hay o no una infracción constitucional (la sola lectura de la norma parece dejar poco espacio para interpretaciones creativas) o penal, los antecedentes que se han ido acumu-

lando traslucen al menos esa displicencia y mal uso de los recursos.

Si en un comienzo se hablaba solo de una profunda desprolijidad de quienes participaron de este proceso por ignorar las prohibiciones que tiene una senadora o una ministra para celebrar contratos con el Estado y de la molestia de muchos sectores de izquierda por haber expuesto a la familia Allende a esta incómoda situación, con las nuevas informaciones conocidas todo este episodio adquiere otra dimensión.

No solo hay distintas advertencias sobre los problemas jurídicos que podría acarrear la suscripción de ese contrato, sino que se observan patentes conflictos de intereses. La familia Allende, lejos de tener un papel pasivo, es la que hace las propuestas, e incluso plantea que la Casa Museo sea entregada luego en comodato a la Fundación Allende, dirigida por la misma familia. ¿Era esta la mejor alternativa para lograr el objetivo buscado y resguardar los dineros públicos? Las autoridades de gobierno parecían obnubiladas por la idea de lograr un objetivo político, sin importarles los costos en que se incurría y los problemas jurídicos que pudiera acarrear la firma del contrato.

●
Las autoridades de gobierno parecían obnubiladas por la idea de lograr un objetivo político, sin importarles los costos en que se incurría y los problemas jurídicos que pudiera acarrear la firma del contrato.